

Pedro López López

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense y Fundador del Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social

¿Reconocimiento social sin compromiso social?

Una de las quejas más extendidas en las profesiones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación es, sin duda, aquella que se refiere a su escaso reconocimiento social. Desde mi punto de vista, nos encontramos ante una queja que tiene su razón de ser, pero que a menudo es formulada por aquellos que muy frecuentemente dan la espalda a problemas que requieren compromiso social. En mi opinión, sin compromiso social no puede exigirse reconocimiento por parte de la sociedad.

Un sector de nuestros profesionales considera de muy mal gusto pronunciarse sobre problemas sociales y cuestiones políticas. Bajo su perspectiva, una cuestión como la condena del golpe de estado perpetrado en Honduras en junio de 2009, no es competencia de los profesionales. Intervenir como profesionales en un debate como el de la llamada recuperación de la memoria histórica ya cae a años luz de sus planteamientos pretendidamente asépticos. Reivindicar la República Española y condenar el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura criminal que dejó ciento y pico mil muertos en las cunetas y miles de niños robados, según está ya sobradamente documentado (y todo esto es una cuestión más actual de lo que parece a primera vista)... eso ya debería ser motivo para retirar el título a cualquier profesional, según los que creen ser neutrales.

Pero, entonces, si cuestiones de esta relevancia política y social, nos son ajenas, ¿qué reconocimiento puede pedirse a la sociedad? Si no hay compromiso con la democracia y los derechos humanos, ¿qué fuerza moral hay para pedir reconocimiento social?

En el mundo del que formo parte, la universidad, un sector no desdeñable del profesorado tiene un total desinterés por

asuntos sociales y políticos, y no ve en absoluto la necesidad de que estos asuntos (responsabilidad social, promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, ética...) se integren en la formación de los futuros profesionales. Cuando se programan actividades en una facultad, tampoco ve con buenos ojos que puedan rebasar el marco académico y profesional (un marco bien concreto y ceñido a cuestiones técnicas y gerenciales), desvinculándolo totalmente de todo aquello que pueda ser percibido como "político". Pero esto hace que la asistencia a actos abiertos sea con frecuencia reducida y haya que "cazar a lazo" a alumnos, profesorado o incluso personal administrativo para no dar una imagen demasiado pobre del centro cuando hay una conferencia con ponente invitado, una mesa redonda o una presentación de libro. Los temas estrella son excesivamente técnicos y centrados en tareas que sólo pueden interesar a especialistas: metadatos, catalogación de materiales especiales, gestión de unidades de información... ¿Cómo se quiere atraer la asistencia de personas ajenas a este mundo?

El sector que más se queja de la falta de reconocimiento es el que más limita la proyección social al boicotear con su actitud cada vez que organizamos algún acto o publicamos una reflexión sobre asuntos como compromiso con los servicios públicos, abusos de la legislación en materia de propiedad intelectual, fomento de los valores democráticos y los derechos humanos, etcétera. Todo esto, para este sector, es visto con un desprecio que refleja una preocupante cortedad de miras intelectual y social.

Precisamente para combatir esta especie de fobia al compromiso social decidimos en noviembre de 2008 crear el

Reflexión

Colectivo de Docentes de Información y Documentación por el Compromiso Social a partir de un manifiesto en el que los integrantes (en la actualidad, más de ochenta, tanto de España como de Portugal y de varios países latinoamericanos) declaramos que las enseñanzas de Información y Documentación “necesitan reforzar aspectos relacionados con el pensamiento social y con el compromiso democrático”. No inventamos la rueda con ello, sino que nos atenemos a directrices reflejadas en documentos de la UNESCO, el Consejo de Europa e incluso de la IFLA. Por mencionar un documento reciente, y no citado, por tanto, en el manifiesto, en julio de 2009 la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior terminó con un comunicado que señalaba (punto 3) que “la educación superior debe no sólo proporcionar habilidades”, sino también “promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, y contribuir a la educación de un ciudadano comprometido con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia”. El manifiesto firmado por los integrantes del colectivo sólo intenta recordar las obligaciones que tiene la universidad, y nos compromete a tratar en nuestra docencia temas y aspectos relacionados con las cuestiones y los valores que destacan el compromiso social de las titulaciones del ámbito de Biblioteconomía y Documentación, fomentar la investigación sobre estos temas, y “en definitiva, impulsar la conciencia social y el compromiso democrático de los futuros profesionales de la información y la documentación”.

Quizás convenga recordar que los más grandes científicos (puede servir para cojear este dato la lista de premios Nobel) normalmente han sido personas comprometidas con la sociedad de su tiempo, con posiciones políticas significadas. Y, por referirme a nuestra área, es conocido que los considerados padres de la Documentación, Otlet y La Fontaine, fueron personalidades comprometidas con el pacifismo en su tiempo. La Fontaine llegó a ser senador socialista y a conseguir el premio Nobel de la Paz. Otlet fue igualmente un destacado pacifista. A ninguno de los dos se le podría haber pasado por la cabeza que fuera posible que la mayoría de un órgano colegiado (una junta) de un centro universitario de su área de conocimiento considerara que era impertinente identificarse con el “No a la guerra” que la inmensa mayoría de la sociedad española y mundial reclamaba en 2003 ante la inminente ocupación ilegal

y criminal de Iraq. Como puede suponer el lector, hablo con conocimiento de causa. Si desde el mundo universitario, desde el mundo de la cultura, no se está contra la guerra como método de resolución de conflictos, si la universidad en momentos así renuncia a estar con la ciudadanía, ¿qué reconocimiento cabe esperar de ésta?

Y para la fobia a “lo político” que tienen algunos colegas (que, por mucho que se empeñen, nunca conseguirán ser “apolíticos”), conviene recordar que el autor del primer *Manual de Biblioteconomía*, el francés Gabriel Naudé, era un bibliotecario político que además acuñó una expresión tan sumamente política como “golpe de estado” (ver artículo de Felipe Meneses en el enlace http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=449). Naudé concebía la biblioteca como un servicio para el ejercicio público de la razón, es decir, lo que posteriormente vino a llamarse “espacio público”, elemento indispensable para el ejercicio de la democracia desde el punto de vista liberal (nada que ver con el punto de vista neoliberal, que sólo quiere espacios de consumo para consumidores y aborrece sobremedida de espacios y personas que pueden ser calificados de “ciudadanos”).

Es conocida la anécdota del libro censurado al cineasta Michael Moore en 2001, tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York. Ante la censura que la editorial pretendió sobre el libro, un foro de bibliotecarios protestó e inundó de cartas a la editorial. La editorial tuvo que rectificar y dejar que *Estúpidos hombres blancos* se publicara tal y como había sido escrito. Ésta es una actuación módica en pro de los derechos civiles y del compromiso social y político, una actuación que deja una huella de reconocimiento en la sociedad, que puede ver que los bibliotecarios “sirven” socialmente para algo, no sólo para estar en sus cubículos realizando con la mayor perfección sus tareas técnicas. Hay cosas más importantes que cumplimentar escrupulosamente tareas técnicas, y con ello no estoy diciendo que esto no sea necesario.

No quiero terminar sin un reconocimiento explícito de la importancia que *EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA* ha dado al compromiso social de los bibliotecarios y archiveros, apoyando causas como la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, la reivindicación del impulso de la República de 1931 a las bibliotecas y a la educación y otras que reflejan una ejemplar actitud cívica. ◀

“A Otlet y La Fontaine no se les habría pasado por la cabeza que desde la universidad se considerara impertinente identificarse con el ‘No a la guerra de 2003’”